



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TRECE (13) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Proceso	Acción de Tutela
Accionante	ABNER MENDOZA COTÚA
Accionada	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Radicado	No. 05001 31 05 013-2022-00505-00
Procedencia	Reparto Oficina Judicial.
Instancia	Primera
Providencia	Interlocutorio No. 2263
Decisión	ACLARA SENTENCIA

Dentro de la presente acción de tutela promovida por el señor **ABNER MENDOZA COTÚA**, identificado con C.C. N° 73.132.773, en contra de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, representada por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez, o por quien haga sus veces al momento de la presente, procede el Despacho a estudiar el memorial presentada por el accionante, en la cual solicita aclaración de la sentencia de tutela proferida por el Despacho el día 7 de diciembre de 2022, toda vez que se presentan inconsistencias en la parte considerativa, que no son concordantes con la parte resolutive.

CONSIDERACIONES

Pretende el accionante, que el Despacho aclare la decisión proferida en la sentencia de tutela, pues considera que existe una inconsistencia entre la sentencia de tutela y el oficio que le fue remitido notificándole tal decisión.

Procedió el Despacho a verificar la mencionada inconsistencia, encontrando que efectivamente tanto en la parte considerativa, así como en la parte resolutive de la sentencia, lo plasmado no es concordante con los hechos y pretensiones de la acción de tutela en contra de la Superintendencia Nacional de Salud, evidenciando que al momento de cargar el archivo al One Drive, sistema de almacenamiento con que cuenta la Rama Judicial, no se guardaron los cambios realizados en el archivo a partir del desarrollo del problema jurídico, siendo esta la razón por la cual el archivo firmado no refleja la sentencia correctamente.

Pues bien, para resolver la solicitud, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 285 del Código General del Proceso. Que señala:

"Artículo 285. Aclaración
La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

De acuerdo con lo anterior, es procedente aclarar tanto la parte considerativa a partir del desarrollo del problema jurídico, así como la parte resolutive de la sentencia de tutela proferida por el Despacho el día 7 de diciembre de 2022.

En la parte considerativa se plasmó lo siguiente:

1. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en establecer si la Agencia Nacional de Tierras, vulneró el derecho fundamental de petición, al no dar respuesta de fondo a la señora Doris Amparo Pulgarín Berrío, a la petición presentada el 18 de agosto de 2022, en la cual solicita copia de la resolución 00666 del 2005 en su momento expedida por el INCODER.

2. EL DERECHO DE PETICIÓN

El aludido derecho fundamental, se encuentra relacionado en el artículo 23 de la Constitución, en los siguientes términos:

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Este derecho ha sido tratado ampliamente por la Jurisdicción Constitucional, definiendo que su núcleo esencial está conformado por dos (2) aspectos: pronta resolución y decisión de fondo¹. En efecto, entre otras cosas podemos señalar que:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y 3. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

¹ Sentencias T-244 de 1.993, M.P. Hernando Vergara Vergara; T-279 de 1.994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-532 de 1.994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-042 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-044 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-021 de 1.998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad, la complejidad de la solicitud o la existencia de un término especial fijado en la ley para resolver de una específica solicitud.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997, T-457 de 1994, sentencia T-979 de 2000.

Conforme lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-1006 del 20 de septiembre de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más, a las arriba mencionadas:

"j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder²";

"k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado".

Así las cosas, la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición es un derecho fundamental que se presenta de una forma compleja pues, en primer lugar, constituye la herramienta de ejercicio de los demás derechos fundamentales, pese a lo cual no pierde su naturaleza de derecho fundamental autónomo, pero, además, tiene como fin salvaguardar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan y en la vida de la Nación.

² Sentencia T-476 del 7 de mayo de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil.

El derecho de petición faculta a toda persona a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas –y en casos especiales a los particulares–, e involucra al mismo tiempo la obligación para la autoridad pública de emitir una respuesta que, si bien no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, resolver de fondo lo requerido por el peticionario y ser puesta en conocimiento del mismo.

Del análisis anterior, se destaca que el derecho de petición exige por parte de las autoridades, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano. Esto implica la proscripción de respuestas evasivas o abstractas, ello no quiere decir que necesariamente la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

Igualmente se ha establecido que existen algunos parámetros que permiten de manera general determinar el contenido y el alcance del derecho de petición, resaltándose que se tendrá por respetado, siempre que la respuesta dada cumpla con estos requisitos: 1. Se realice de manera oportuna 2. Resuelva de fondo, clara, precisa y de manera congruente lo solicitado y 3. Se ponga en conocimiento del peticionario; sin que ésta respuesta implique la aceptación de lo solicitado.

Con relación al término en que han de resolverse las peticiones respetuosas que en interés particular formulan los ciudadanos a la administración, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo [1](#) de la Ley 1755 de 2015, que señala:

"Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

..." (Subrayas y negrillas fuera de texto)

3. LA CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, se ha pronunciado en varias oportunidades, entre ellas en la sentencia T-150 de 2019, exponiendo que existe carencia actual de objeto, cuando se presentan estos tres elementos o motivos: el daño consumado; el hecho superado y cualquier otra circunstancia que permita

concluir que la orden del juez de tutela sobre la solicitud de amparo sería inútil. Así lo expreso:

"19. La acción de tutela tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados por entidades públicas o privadas. No obstante, la Corte ha reconocido que, mientras se da trámite al amparo, pueden surgir algunas circunstancias que lleven al juzgador a concluir que la amenaza o vulneración que motivó la presentación de la acción de tutela ha desaparecido.

En este supuesto, cualquier orden que el juez de tutela pueda dar respecto del caso se vuelve inocua y no surtirá efecto debido a que no existe ninguna amenaza o perjuicio a evitar, situación que desvirtúa el objeto esencial para el que la acción de tutela fue creada. Por ello, en esos casos, "el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción". Este fenómeno ha sido denominado carencia actual de objeto y se puede originar por diferentes motivos, a saber: (i) el daño consumado; (ii) el hecho superado y (iii) cualquier otra circunstancia que permita concluir que la orden del juez de tutela sobre la solicitud de amparo sería inútil.

*20. Respecto a lo anterior, esta Corporación ha especificado que la carencia actual de objeto por **daño consumado** "supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela". En estos casos se da una materialización de la vulneración a algún derecho fundamental; por tanto, es primordial que el juez de tutela se pronuncie sobre esta vulneración y el daño que se ocasionó.*

*Por otro lado, esta Corporación ha señalado que la carencia actual de objeto por **hecho superado** se presenta cuando desaparecen los actos que amenazan la vulneración de un derecho fundamental. En este sentido, la **Sentencia T-085 de 2018** estableció que el hecho superado tiene ocurrencia:*

"cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional"

*Finalmente, en los eventos en que se configura una carencia actual de objeto por **cualquier otra causa**, la Corte ha dicho que "(...) no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir [la] Corte con el fin de amparar los derechos del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia"*

*21. En particular, en el supuesto de carencia actual de objeto por **hecho superado** no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo si se considera que la decisión debe incluir observaciones relacionadas con el caso en estudio. Específicamente, si se considera que se debe llamar la atención sobre la falta que originó la acción de tutela en primer lugar, o condenar su*

ocurrencia y advertir sobre la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes. Por otro lado, lo que sí resulta imprescindible en estos casos es demostrar la cabal reparación del derecho antes del momento del fallo, lo cual denotaría la existencia de un hecho superado.

*Precisamente, la **Sentencia T-085 de 2018**, al reiterar la **Sentencia T-045 de 2008**, resumió los siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está o no en presencia de un hecho superado. Estos son:*

"1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado".

4. CASO CONCRETO

Analizado el material probatorio aportado por la accionante, en [pág. 9 pdf 02AccionTutela](#), reposa de solicitud presentada ante la Agencia Nacional de Tierras a través de correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2022.

En la respuesta allega a la tutela por parte de la Agencia Nacional de Tierras, informó que mediante memorando del 16 de noviembre de 2022, la misional competente informó que, a través de los radicados de salida No. 20226201491801, dio respuesta a la petición radicada por la parte accionante adjuntando copia simple de la Resolución 000666 de 07 de abril de 2005, respuesta que fue enviada al correo de la accionante, con constancia de entrega de 16 de noviembre de 2022.

Ahora bien, conforme la constancia que antecede, el apoderado de la accionante indicó al Despacho a través de llamada telefónica, que había recibido la respuesta en el correo electrónico por parte de la pasiva Agencia Nacional de Tierras, con la respectiva resolución 000666 de 07 de abril de 2005.

Así las cosas, considera este Despacho que la Agencia Nacional de Tierras ha dado una respuesta de fondo a la solicitud presentada por la accionante.

Por lo anterior, esta Judicatura considera, que en el sub lite no existe una vulneración de derechos fundamentales, en la medida en que la entidad acciona emitió respuesta de fondo, resolviendo de fondo la petición presentada por la accionante y que de acuerdo a la prueba documental aportada por la pasiva, se ha superado la vulneración al derecho que tiene la accionante al derecho de petición.

Y como al momento de proferir decisión de fondo no se observa la vulneración o amenaza de algún derecho fundamental por parte de la Agencia Nacional de Tierras, se denegará el amparo constitucional solicitado, por hecho superado.

Si la presente providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días señalado en el artículo 31 del Decreto 2561 de 1991, por la Secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”

Es evidente que tales consideraciones no tienen relación alguna con la acción constitucional de la referencia, Debiendo indicar el Despacho que el texto correcto, proveniente de la suscrita en el caso particular, es el siguiente:

5. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en establecer si la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, vulneró el derecho fundamental de petición y seguridad social, al no dar respuesta de fondo al señor Abner Mendoza Cotúa, a la petición presentada el 31 de octubre de 2022, en la cual solicita información sobre: *"las acciones que esta entidad ha, viene y a futuro, las acciones pertinentes a las entidades de salud que estas tienen a su cargo en cuanto a la vigilancia y control, específicamente con la cartelización que se vienen presentando con los suministradores de medicamentos de las EPS (SALUD TOTAL-AUDIFARMA, SURACOLSUBSIDIO, SAVIA SALUD-COHAN), los cuales no entregan los pendientes a los usuarios, y en mi caso particular Salud Total a través de su aliado AUDIFARMA."*

6. EL DERECHO DE PETICIÓN

El aludido derecho fundamental, se encuentra relacionado en el artículo 23 de la Constitución, en los siguientes términos:

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Este derecho ha sido tratado ampliamente por la Jurisdicción Constitucional, definiendo que su núcleo esencial está conformado por dos (2) aspectos: pronta resolución y decisión de fondo³. En efecto, entre otras cosas podemos señalar que:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y 3. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

³ Sentencias T-244 de 1.993, M.P. Hernando Vergara Vergara; T-279 de 1.994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-532 de 1.994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-042 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-044 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-021 de 1.998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad, la complejidad de la solicitud o la existencia de un término especial fijado en la ley para resolver de una específica solicitud.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997, T-457 de 1994, sentencia T-979 de 2000.

Conforme lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-1006 del 20 de septiembre de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más, a las arriba mencionadas:

"j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder⁴";

"k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado".

Así las cosas, la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición es un derecho fundamental que se presenta de una forma compleja pues, en primer lugar, constituye la herramienta de ejercicio de los demás derechos fundamentales, pese a lo cual no pierde su naturaleza de derecho fundamental autónomo, pero, además, tiene como fin salvaguardar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan y en la vida de la Nación.

El derecho de petición faculta a toda persona a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas –y en casos especiales a los particulares–, e involucra al mismo tiempo la obligación para la autoridad pública de emitir una respuesta que, si bien no tiene que ser

⁴ Sentencia T-476 del 7 de mayo de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil.

favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, resolver de fondo lo requerido por el peticionario y ser puesta en conocimiento del mismo.

Del análisis anterior, se destaca que el derecho de petición exige por parte de las autoridades, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano. Esto implica la proscripción de respuestas evasivas o abstractas, ello no quiere decir que necesariamente la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

Igualmente se ha establecido que existen algunos parámetros que permiten de manera general determinar el contenido y el alcance del derecho de petición, resaltándose que se tendrá por respetado, siempre que la respuesta dada cumpla con estos requisitos: 1. Se realice de manera oportuna 2. Resuelva de fondo, clara, precisa y de manera congruente lo solicitado y 3. Se ponga en conocimiento del peticionario; sin que ésta respuesta implique la aceptación de lo solicitado.

Con relación al término en que han de resolverse las peticiones respetuosas que en interés particular formulan los ciudadanos a la administración, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo [1](#) de la Ley 1755 de 2015, que señala:

"Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

..."(Subrayas y negrillas fuera de texto)

7. CASO CONCRETO

Analizado el material probatorio aportado por el accionante, en pág. 6 a 7 pdf 02AccionTutela, reposa copia de solicitud presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud y en pág. 8 pdf 02AccionTutela reposa copia de la constancia de radicación ante la Superintendencia de Salud de fecha 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302.

En la respuesta allega a la tutela por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, informó que una vez consultado el aplicativo de gestión PQRD el usuario contaba con la PQR-20222100013055302 de fecha 04/10/2022 radicada en esta Superintendencia.

El Grupo de Inspección y Vigilancia a las PQRD realizó requerimiento a Salud Total EPS bajo el consecutivo 20222100201711881, con el fin de que informe las gestiones adelantadas para garantizar el suministro de los medicamentos que son requeridos para el manejo de sus patologías.

La EPS allegó respuesta informando *"Se realiza la validación correspondiente y se evidencia que el medicamento FLUCONAZOL TABLETA O CAPSULA 200 MG, a la fecha se encuentra con dificultad logística, sin embargo se observa que la farmacia BOLIVIA (CARRERA 46 NUMERO 53 - 44 LOCAL 203 EDIFICIO COLSEGUROS) cuenta con saldo además se identifica que tiene orden vigente para la entrega efectiva,"*

El Grupo Interno de Trabajo de Atención a PQRS y Solicitudes de Información elaboró respuesta de fondo al usuario la cual fue enviada con el radicado 20222200101718871 (adjunta prueba de recibido) adjuntando los soportes documentales que dan cuenta de las gestiones adelantadas al caso.

Ahora bien, el Despacho realizando un análisis minucioso en relación con el derecho de petición presentado por el accionante ante la pasiva, observa que, si bien emitió una respuesta, la cual fue enviada al correo electrónico aportado en el acápite de notificaciones, no se aprecia una respuesta de fondo, pues se limita a explicar que dio traslado de la solicitud a la EPS SALUD TOTAL, entidad esta última que emitió una respuesta frente a los medicamentos ordenados por el médico tratante al accionante, sin que se haya pronunciado concretamente frente a la pretensión del derecho de petición, esto es: *"se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD."*

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar la omisión de la entidad accionada Superintendencia Nacional de Salud, en dar respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante, lo que se constituye en una flagrante violación del derecho de petición, razón por la cual, debe concederse el amparo de tutela impetrado en dicho sentido, y en tal virtud se ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud - representada legalmente por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez, o por quien haga sus veces al momento de la presente, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a emitir respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302, frente a la solicitud de *"se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD"*, allegando la constancia de entrega de la respuesta a este Despacho Judicial.

Si la presente providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días señalado en el artículo 31 del Decreto 2561 de 1991, por la Secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión."

Es menester indicar que en la parte resolutive quedó plasmado:

"PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora **DORIS AMPARO PULGARÍN BERRÍO**, identificada con C.C. N° 39.304.712, en contra de

la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, representada por el doctor Gerardo Vega Medina, por **HECHO SUPERADO**, según se explicó en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días, señalado en el art. 31 del Decreto 2591 citado, por la secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: Archivar definitivamente el expediente, previa desanotación de su registro, una vez devuelto de la Alta Corporación de no haber sido objeto de revisión.

Notifíquese en legal forma a las partes la presente providencia."

Ahora bien, la parte considerativa debe quedar de la siguiente manera:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por **ABNER MENDOZA COTÚA**, identificado con C.C. N° 73.132.773, en contra de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, representada por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez, conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, representada por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a emitir respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302, frente a la solicitud de "*se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD*", allegando la constancia de entrega de la respuesta a este Despacho Judicial.

TERCERO: Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro del término señalado en el art. 31 del Decreto 2591 citado, por la secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Archivar definitivamente el expediente previa desanotación de su registro, una vez devuelto de la Alta Corporación de no haber sido objeto de revisión.

Notifíquese en legal forma a las partes la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TRECE (13) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, Administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO: ACLARAR la parte considerativa de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 7 de diciembre de 2022, la cual quedará de la siguiente manera:

8. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en establecer si la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, vulneró el derecho fundamental de petición y seguridad social, al no dar respuesta de fondo al señor Abner Mendoza Cotúa, a la petición presentada el 31 de octubre de 2022, en la cual solicita información sobre: *"las acciones que esta entidad ha, viene y a futuro, las acciones pertinentes a las entidades de salud que estas tienen a su cargo en cuanto a la vigilancia y control, específicamente con la cartelización que se vienen presentando con los suministradores de medicamentos de las EPS (SALUD TOTAL-AUDIFARMA, SURA-COLSUBSIDIO, SAVIA SALUD-COHAN), los cuales no entregan los pendientes a los usuarios, y en mi caso particular Salud Total a través de su aliado AUDIFARMA."*

9. EL DERECHO DE PETICIÓN

El aludido derecho fundamental, se encuentra relacionado en el artículo 23 de la Constitución, en los siguientes términos:

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Este derecho ha sido tratado ampliamente por la Jurisdicción Constitucional, definiendo que su núcleo esencial está conformado por dos (2) aspectos: pronta resolución y decisión de fondo⁵. En efecto, entre otras cosas podemos señalar que:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y 3. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

⁵ Sentencias T-244 de 1.993, M.P. Hernando Vergara Vergara; T-279 de 1.994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-532 de 1.994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-042 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-044 de 1.997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-021 de 1.998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad, la complejidad de la solicitud o la existencia de un término especial fijado en la ley para resolver de una específica solicitud.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997, T-457 de 1994, sentencia T-979 de 2000.

Conforme lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-1006 del 20 de septiembre de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más, a las arriba mencionadas:

"j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder⁶";

"k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado".

Así las cosas, la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición es un derecho fundamental que se presenta de una forma compleja pues, en primer lugar, constituye la herramienta de ejercicio de los demás derechos fundamentales, pese a lo cual no pierde su naturaleza de derecho fundamental autónomo, pero, además, tiene como fin salvaguardar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan y en la vida de la Nación.

El derecho de petición faculta a toda persona a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas –y en casos especiales a los particulares-, e involucra al mismo tiempo la obligación para la autoridad pública de emitir una respuesta que, si bien no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, resolver de fondo lo requerido por el peticionario y ser puesta en conocimiento del mismo.

Del análisis anterior, se destaca que el derecho de petición exige por parte de las autoridades, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano. Esto implica la proscripción de respuestas evasivas o abstractas, ello no quiere decir que

⁶ Sentencia T-476 del 7 de mayo de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil.

necesariamente la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

Igualmente se ha establecido que existen algunos parámetros que permiten de manera general determinar el contenido y el alcance del derecho de petición, resaltándose que se tendrá por respetado, siempre que la respuesta dada cumpla con estos requisitos: 1. Se realice de manera oportuna 2. Resuelva de fondo, clara, precisa y de manera congruente lo solicitado y 3. Se ponga en conocimiento del peticionario; sin que ésta respuesta implique la aceptación de lo solicitado.

Con relación al término en que han de resolverse las peticiones respetuosas que en interés particular formulen los ciudadanos a la administración, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que señala:

"Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

..."(Subrayas y negrillas fuera de texto)

10. CASO CONCRETO

Analizado el material probatorio aportado por el accionante, en pág. 6 a 7 pdf 02AccionTutela, reposa copia de solicitud presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud y en pág. 8 pdf 02AccionTutela reposa copia de la constancia de radicación ante la Superintendencia de Salud de fecha 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302.

En la respuesta allega a la tutela por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, informó que una vez consultado el aplicativo de gestión PQRD el usuario contaba con la PQR-20222100013055302 de fecha 04/10/2022 radicada en esta Superintendencia.

El Grupo de Inspección y Vigilancia a las PQRD realizó requerimiento a Salud Total EPS bajo el consecutivo 20222100201711881, con el fin de que informe las gestiones adelantadas para garantizar el suministro de los medicamentos que son requeridos para el manejo de sus patologías.

La EPS allegó respuesta informando *"Se realiza la validación correspondiente y se evidencia que el medicamento FLUCONAZOL TABLETA O CAPSULA 200 MG, a la fecha se encuentra con dificultad logística, sin embargo se observa que la farmacia BOLIVIA (CARRERA 46 NUMERO 53 - 44 LOCAL 203 EDIFICIO COLSEGUROS) cuenta con saldo además se identifica que tiene orden vigente para la entrega efectiva,"*

El Grupo Interno de Trabajo de Atención a PQRS y Solicitudes de Información elaboró respuesta de fondo al usuario la cual fue enviada con el radicado 20222200101718871 (adjunta prueba de recibido) adjuntando los soportes documentales que dan cuenta de las gestiones adelantadas al caso.

Ahora bien, el Despacho realizando un análisis minucioso en relación con el derecho de petición presentado por el accionante ante la pasiva, observa que, si bien emitió una respuesta, la cual fue enviada al correo electrónico aportado en el acápite de notificaciones, no se aprecia una respuesta de fondo, pues se limita a explicar que dio traslado de la solicitud a la EPS SALUD TOTAL, entidad esta última que emitió una respuesta frente a los medicamentos ordenados por el médico tratante al accionante, sin que se haya pronunciado concretamente frente a la pretensión del derecho de petición, esto es: *"se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD."*

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar la omisión de la entidad accionada Superintendencia Nacional de Salud, en dar respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante, lo que se constituye en una flagrante violación del derecho de petición, razón por la cual, debe concederse el amparo de tutela impetrado en dicho sentido, y en tal virtud se ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud - representada legalmente por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez, o por quien haga sus veces al momento de la presente, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a emitir respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302, frente a la solicitud de *"se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD"*, allegando la constancia de entrega de la respuesta a este Despacho Judicial.

Si la presente providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días señalado en el artículo 31 del Decreto 2561 de 1991, por la Secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión."

SEGUNDO: ACLARAR la parte resolutive de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 7 de diciembre de 2022, la cual quedará de la siguiente manera:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por **ABNER MENDOZA COTÚA**, identificado con C.C. N° 73.132.773, en contra de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, representada por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez, conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, representada por el doctor Ulahy Beltrán Ramírez o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a emitir respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 31 de octubre de 2022 con radicado PQR-20222100013055302, frente a la solicitud de *"se me conteste de Fondo sobre los procesos que esta entidad ha realizado, medidas y sanciones a los diferentes aliados de las EPS en cuestión, con la NO entrega de los PENDIENTES a los diferentes usuarios que están incumpliendo la resolución del MINSALUD"*, allegando la constancia de entrega de la respuesta a este Despacho Judicial.

TERCERO: Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro del término señalado en el art. 31 del Decreto 2591 citado, por la secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Archivar definitivamente el expediente previa desanotación de su registro, una vez devuelto de la Alta Corporación de no haber sido objeto de revisión.

Notifíquese en legal forma a las partes la presente providencia.

LAURA FREIDEL BETANCOURT
Juez

JDC

Firmado Por:
Laura Freidel Betancourt
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 013
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dbbeec0e5cd47d45c584bde628a123256b1ff8483bfa9ed73f227574086afe17**
Documento generado en 12/12/2022 10:37:46 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>